

Medellín, tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	<b>DECLARATIVO - RCE</b>
Radicado	<b>05 360 31 03 001 2020 00115 01</b>
Demandante	<b>OMAIRA DE JESÚS SUAREZ ORTÍZ Y OTROS</b>
Demandado	<b>CRISANTO SUSPE RIAÑO Y OTROS</b>
Juzgado Origen	<b>PRIMERO CIVIL CIRCUITO ITAGÜÍ</b>

Procede el despacho a pronunciarse respecto de la solicitud de pruebas formulada por el apoderado de los demandados dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación de sentencia.

ANTECEDENTES

Mediante auto del 13 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida en el proceso de la referencia<sup>1</sup>. Dentro del término de ejecutoria, el recurrente presentó petición probatoria consistente en trasladar la prueba practicada en la investigación de conocimiento de la Fiscalía 246 Seccional de Itagüí con código de identificación 050016000206201931894, por cuanto, se dejó de practicar en la primera instancia<sup>2</sup>.

CONSIDERACIONES

El ordenamiento jurídico procesal prevé como uno de los principios fundantes de las decisiones judiciales, la necesidad de la prueba, a fin de determinar los hechos alegados por las partes con lo probado en el proceso, para lo cual deben garantizarse los principios de igualdad entre las partes, contradicción e imparcialidad.

Para que estas pruebas puedan incorporarse al trámite judicial, las partes cuentan con precisas oportunidades para aportarlas y solicitarlas (artículo 173 del CGP), momento en el que deben cumplir la carga demostrativa que les compete, so pena de que sus pretensiones o medios exceptivos resulten imprósperos por carencia de respaldo (artículo 167 ibidem).

En el trámite de la apelación de sentencias civiles existe la oportunidad excepcional para que las partes soliciten el decreto de pruebas pues, por tratarse de un estado avanzado del litigio, en el que en principio se supone agotada la instrucción, tal posibilidad es restringida a precisas hipótesis consagradas en el artículo 327 adjetivo, entre las cuales se

<sup>1</sup> Ver carpeta 02SegundaInstancia / archivo 03AdmiteRecursoCorreTraslados

<sup>2</sup> Ibid. 07MemorialSolicitudPruebas

debe destacar la del numeral 2, que contempla la posibilidad de que las partes pidan la práctica de pruebas cuando *"decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió"*.

En el caso concreto, se advierte que, en la contestación de la demanda el extremo pasivo solicitó prueba trasladada de la Fiscalía Seccional de Itagüí, por cursar allí investigación por el presunto delito de homicidio, siendo víctima Daniel Alejandro Holguín Suarez, quien falleció en el accidente de tránsito referido en los hechos de la demanda<sup>3</sup>.

En audiencia inicial del 25 de agosto de 2022 se decretó la prueba en comento, se ordenó librar oficio y se requirió a ambas partes para su diligenciamiento<sup>4</sup>. No obstante, no milita en el expediente exhorto, ni gestión alguna proveniente de las partes tendiente a la obtención de la prueba.

Posteriormente, se celebró audiencia de instrucción y juzgamiento el 28 de octubre de la misma anualidad, momento para el cual no se había recaudado la prueba trasladada. El fallador estimó que la prueba visible en el expediente era suficiente para decidir de fondo y cerró el periodo probatorio, decisión que notificó a las partes en estrados y que no mereció reproche alguno de los apoderados alcanzando firmeza. A continuación, se procedió con los alegatos de conclusión y la emisión del fallo.

La actuación reseñada pone al descubierto el desinterés de la parte en la obtención de la prueba trasladada, pues aun cuando no se observa la emisión del oficio, brilla por su ausencia solicitud dirigida al juzgado de origen para obtener su elaboración, tampoco se observa petición elevada ante el ente investigador para que efectuara el traslado correspondiente, pese a ostentar el demandado Cristancho Suspe Riaño la calidad de indiciado<sup>5</sup>. Desinterés que se hizo más visible cuando la parte manifestó su anuencia con el cierre del periodo probatorio.

Sobre el deber de diligencia que les asiste a las partes en la prueba de sus posiciones procesales, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado:

*"Con todo, las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la*

<sup>3</sup> Ibid. ver archivos 22ContestacionCooperativa y 35ContestacionDemandaCrisantoSuspe

<sup>4</sup> Ibid. archivo 49Audio4AudienciaInicialAgosto25De2022. Minuto 1:17:00

<sup>5</sup> Según certificado que reposa en el archivo 02.AnexosDemanda página 55

*estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes.*

*(...) En conclusión la carga de la prueba impulsa la actividad de las partes para que aporten elementos de prueba al proceso, sin que una confíe la actividad a la otra o asuma como premio las dificultades que aquella tenga en el aporte y obtención de los medios de prueba. En el proceso dispositivo, las partes actúan con diligencia en el aporte de la prueba; en cumplir la carga de demostrar lo que alegan porque tal actividad garantiza una decisión que resuelve el conflicto"<sup>6</sup>.*

En el mismo sentido sostuvo la Corte:

*"Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, "las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar."<sup>7</sup>*

Bajo tal panorama, es claro para el despacho que la parte demandada no demostró diligencia en la práctica de la prueba judicial pretendida y por tanto la ausencia de la prueba que reclama en esta etapa obedece a su propia culpa, pues habiéndola solicitado en primera instancia, no mostró gestión alguna tendiente a su materialización, ni acreditó motivos adicionales que justificaran su inercia, contrario a ello, aceptó el cierre del periodo probatorio con prescindencia de la prueba, circunstancias que no permiten la configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 327 del CGP, para decretarse a solicitud de parte.

Finalmente, como quiera que la apelante no ha procedido a sustentar el recurso de alzada, se advierte que de conformidad con el inciso 3° del artículo 12 de la ley 1213 de 2022, ejecutoriado este auto cuenta con el término de cinco días para el efecto.

Por lo expuesto, el Despacho,

#### RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de práctica de prueba trasladada pedida por la parte demandada, por las razones expuestas.

---

<sup>6</sup> Sentencia T-733 de 2013, Corte Constitucional. M.P.: Luís Ernesto Vargas Silva.

<sup>7</sup> Sentencia C-086 de 2016, Corte Constitucional. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

SEGUNDO: ADVERTIR al apelante que dispone de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia para sustentar el recurso de alzada.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
Magistrado